



Consejo de Seguridad

Distr. general
28 de octubre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 25 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Le escribo con referencia a mi carta de fecha 6 de agosto de 2002 (S/2002/910).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe suplementario adjunto del Yemen, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el anexo).

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Carta de fecha 17 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente del Yemen ante las Naciones Unidas

En relación con su carta de fecha 15 de julio de 2002 (referencia S/AC.40/2002/MS/OC.128), relativa al informe del Gobierno del Yemen sobre medidas de lucha contra el terrorismo, tengo el honor de adjuntarle la respuesta a dicha carta.

(Firmado) Abdullah M. **Alsaïdi**
Embajador
Representante Permanente

Apéndice

[Original: árabe]

Párrafo 1 a) de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Respuesta

El Banco Central del Yemen es el encargado de señalar a qué entidades y personas es preciso interrumpir el apoyo financiero de conformidad con lo dispuesto en la carta del Presidente del Consejo de Ministros, de fecha 3 de octubre de 2001 (número RW/35/3513), en la carta del Ministro de Relaciones Exteriores, de fecha 2 de octubre de 2001 (1/156/102/1553), en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y en el decreto del Consejo de Ministros aprobado durante la sesión celebrada el día 2 de octubre de 2001.

El Banco Central del Yemen promulgó directrices de obligado cumplimiento a todos los bancos que operan en la República del Yemen, según se explica a continuación:

1. Circular No. 81206, de 4 de octubre de 2001, en la que figuran 27 nombres de organizaciones e individuos de los que se pide la congelación de sus capitales;
2. Circular No. 8735, de 18 de octubre de 2001, que incluye 39 nombres de empresas, individuos y organismos;
3. Circular No. 99230, de 24 de noviembre de 2001, que incluye dos listas, de las que la primera incluye 16 organizaciones y la segunda 62 personas y organizaciones.

En las directrices emitidas por el Banco Central figura una comunicación dirigida a los bancos, organizaciones y personas a quienes corresponde la congelación de las cuentas (de las personas de la lista) para que notifiquen cualesquiera capitales que sean congelados y otros datos en relación con cualquier nombre que figure en la lista.

Párrafo 1 b)

Respuesta

La Ley 1/2001, relativa a las sociedades e instituciones privadas, se compone de 88 artículos divididos en ocho capítulos:

Capítulo I: Incluye la denominación, las definiciones y los objetivos de la ley;

Capítulo II: Incluye las disposiciones relativas a la constitución, inscripción y declaración de sociedades e instituciones privadas;

Capítulo III: Es relativo a la modalidad de gestión de las asociaciones e instituciones privadas y de sus recursos financieros;

Capítulo IV: Se refiere a las modalidades de resolución, disolución, fusión y partición de sociedades e instituciones privadas;

Capítulo V: Contiene textos y disposiciones relativas a las instituciones privadas;

Capítulo VI: Es relativo a las federaciones;

Capítulo VII: Incluye las medidas penalizadoras;

Capítulo VIII: Se refiere a las disposiciones finales.

Esta Ley tiene por objeto proteger y fomentar las instituciones y sociedades privadas para que participen en el ámbito del desarrollo global y no contravengan los objetivos de la Constitución y de las leyes y legislación en vigor.

La Ley otorga al Ministerio de Seguridad y Asuntos Sociales y a sus oficinas en la circunscripción de la capital y en las provincias competencias para supervisar jurídica y auditorialmente la situación y actividades de las sociedades e instituciones privadas.

La Ley establece penas que oscilan entre pena de cárcel y multa a todo aquel que realizase actividades o emplease los fondos de esas asociaciones o instituciones de forma contraria a los objetivos para los que fueron creadas.

La República del Yemen procura difundir estos acuerdos entre las partes pertinentes, a fin de que puedan atenerse a ellos en su actividad, y el Gobierno vigila su aplicación.

Párrafo 1 c)

Respuesta

1. El Banco Central del Yemen se encarga de dictar instrucciones a todos los bancos e instituciones de cambio que operan en la República del Yemen en relación con los fondos sospechosos. Estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio “conoce a tu cliente”. Igualmente, adopta todo tipo de precauciones en los casos en los que así resulta necesario, además de pedir que se aporten datos, de conformidad con el principio que aconseja atesorar fondos, pero también registros. Por ejemplo, dichas instrucciones obligan a realizar una investigación sobre la persona que solicita una transferencia y que, no teniendo una cuenta abierta en el banco, desea transferir fondos por una suma en metálico superior a los 10.000 dólares o cantidad equivalente en otras divisas. Se aplica la misma disposición que figura en ese artículo a los beneficiarios de la transferencia, manteniéndose especial cuidado en todos los casos en obtener datos exhaustivos.

En la Ley sobre Bancos no existen disposiciones conexas. Sin embargo, el apartado 1 a) del artículo 25 obliga a todos los bancos e instituciones financieras en relación con los cuales el Banco Central del Yemen emita una resolución a proporcionar a dicho Banco Central un informe mensual en el que se aclaren:

- a) El balance de crédito ofrecido por el banco o la institución financiera;
- b) Una relación de los préstamos y facilidades crediticias por valor igual o superior a 10 millones de riyales, así como los nombres de los prestatarios, los plazos de amortización y las garantías presentadas;
- c) Una lista con los nombres de los prestatarios y de los préstamos cuyo plazo de amortización ha sido rebasado en 90 días sin que haya sido satisfecho en parte, y estimación de la cantidad adeudada no amortizada.

2. El Banco Central prepara una declaración consolidada sobre las facilidades ofrecidas a cada cliente bancario, las cantidades que se ha permitido retirar en descubierto y las garantías presentadas, así como un registro de moras en el pago de

sus deudas por todos los prestatarios sin mencionar los nombres de los bancos acreedores.

3. Cualquier banco o institución financiera puede ser objeto de una resolución dictada por el Banco Central en la que se le pida consultar la declaración consolidada relativa a cualquier operación en la que se pidieran facilidades crediticias, sin que el Banco Central tenga responsabilidad alguna por los datos incluidos en las declaraciones consolidadas o por su difusión.

La congelación de depósitos en virtud de la Ley de Bancos (Ley 38/1998) no evitará la condena por la comisión de cualquier delito.

El Fiscal General deberá adoptar medidas precautorias hasta que se realicen las investigaciones y se abra procedimiento judicial.

Párrafo 1 d)

Respuesta

Declaración detallada sobre las disposiciones de la Ley 12/1994. Dicha Ley se refiere a delitos y condenas, y contiene 225 artículos distribuidos en 13 capítulos. La Ley establece los tipos de delitos, y enumera las condenas correspondientes. La Ley dedica un capítulo específico a los delitos relacionados con la seguridad del Estado, e igualmente a los delitos relativos a la seguridad interna, como la rebelión armada, la participación en banda armada y los delitos relativos a la seguridad interna (como la rebelión armada y la participación en una banda armada). Igualmente, la Ley dedica un capítulo a los delitos que entrañen un peligro público (como los incendios provocados, la detonación de artefactos explosivos, la puesta en peligro de los medios de transporte y las comunicaciones, la tenencia y comercialización de explosivos y el transporte de materiales explosivos). La Ley también incluye disposiciones en relación con los delitos que sean lesivos para la economía nacional.

En relación con las leyes y medidas en vigor dirigidas a regular los medios de pago alternativos, entre ellos los medios afines o similares a la *hawala*, son los siguientes:

- a) Medios de pago actuales, que son los medios tradicionales siguientes:
 1. Efectivo;
 2. Cheques;
 3. *Hawala*.
- b) Las disposiciones y leyes que regulan los medios de pago tradicionales son:
 1. La Ley del Banco Central (Ley 14/2000);
 2. La Ley Financiera (Ley 8/1990);
 3. La Ley de Comercio (Ley 32/1991);
 4. El Código Civil (Ley 14/2002);
 5. La Ley de Cambio (Ley 20/1995);
 6. Las normativas bancarias.

c) El Banco Central dictó instrucciones a las instituciones de cambio y a los bancos que operan en la República del Yemen, que entrañan:

1. La necesidad de verificar la identidad de la persona que solicita la transferencia y que, no teniendo una cuenta abierta en el banco, desea transferir cantidades en metálico superiores a los 10.000 dólares de los EE.UU. o cantidad equivalente en otras divisas;
2. Se aplica la misma disposición a los beneficiarios de la transferencia, poniéndose especial cuidado en todos los casos en recabar de la persona datos de forma exhaustiva.

d) Requisitos:

Capacitar al personal directivo en los distintos aspectos de la actividad bancaria.

Párrafo 2 a)

Respuesta

La Constitución del Yemen se refiere en su Título IV a los principios de la defensa nacional, y el artículo 36 estipula que “El Estado es quien recluta las fuerzas armadas, la policía y las fuerzas de seguridad y cualesquiera fuerzas de otro tipo, que son propiedad del pueblo en su conjunto, y cuyo cometido es la protección de la República y mantener la integridad del territorio y la seguridad, no siéndole permitido a ningún organismo, individuo, grupo, organización o partido político constituir fuerzas o formaciones militares o paramilitares para ningún fin y bajo ninguna denominación”.

Igualmente, la ley 66/1991, relativa a los partidos y organizaciones políticas, en el párrafo sexto de su artículo 8 prohíbe a los partidos y organizaciones políticas:

- a) Crear formaciones militares o paramilitares o ayudar a crearlas;
- b) Utilizar la violencia en todas sus formas, la amenaza de su uso o la incitación a ella;
- c) Incluir en sus programas, comunicados o publicaciones material que incite a la violencia o crear formaciones militares o paramilitares, de forma pública o secreta.

Las medidas adoptadas en la práctica para impedir que los terroristas accedan a armamento son:

A nivel externo:

- La imposición de una vigilancia estricta en los puertos, aeropuertos y accesos terrestres para impedir la entrada de cualesquiera armas, y la provisión a dichos accesos de sistemas electrónicos de vigilancia;
- La vigilancia de las costas del Yemen por parte de la patrulla de vigilancia costera, que está creándose actualmente y que necesita apoyo y respaldo.

A nivel interno:

- Vigilancia en los lugares de venta de armas;
- Imposición de un control estricto a la importación y transporte de los explosivos para cuya importación se haya declarado que se destinan a proyectos de desarrollo y a las obras civiles y militares conexas;

- La ley que regula la tenencia de armas de fuego y sus municiones, así como su comercialización, es la Ley 40/1992, y la ordenanza ejecutiva de la ley, aprobada en virtud del Decreto de la República 1/1994. Esta ley regula la tenencia de armas de fuego y somete las actividades comerciales a la obtención de un permiso emitido por el Ministerio del Interior, estableciéndose la necesidad de confiscar las armas que contravengan la ley y su ordenanza.

Párrafo 2 b)

Respuesta

Se ocupan de la lucha contra el terrorismo diversos organismos (el Organismo Central de Seguridad Política del Ministerio del Interior; la Dependencia Antiterrorismo y el Órgano de Seguridad Nacional, que está actualmente en período de constitución), y el Gobierno establece las políticas públicas y las disposiciones antiterroristas, asumiendo cada uno de estos órganos su función.

En aras de la efectividad de la lucha contra el terrorismo, se establece cada cierto tiempo coordinación entre los organismos pertinentes. El nivel de coordinación es tal que se ha constituido un Equipo de Gestión de Crisis para cuando así lo exijan las circunstancias.

De conformidad con las políticas públicas que establece el Gobierno, cada uno de estos órganos prepara a su vez sus planes y programas. Por lo que respecta a la distribución de funciones, se organizan en el marco de la coordinación establecida entre los organismos.

El mecanismo disponible actualmente consiste en contactos bilaterales entre los organismos pertinentes, las misiones diplomáticas y la Interpol, siempre de conformidad con lo dispuesto en la Convención árabe sobre la represión del terrorismo.

Párrafo 2 c)

Respuesta

La Ley 47/1991, relativa a la entrada y residencia de extranjeros, así como la ordenanza ejecutiva 4/1994, abordan las modalidades de entrada de extranjeros y también las disposiciones relativas a su registro tras su entrada al territorio de la República del Yemen. Igualmente, incluye textos y disposiciones relativas a los permisos de residencia. La Ley otorga al Ministro del Interior potestad para deportar a cualquier extranjero, de conformidad con la resolución dictada por la Comisión de Deportación, contemplada en esta Ley. Por último, la Ley dedica un capítulo a las penas, que pueden fluctuar entre cárcel y multa en los casos en que un extranjero entre en el territorio de la República de forma ilegítima, o cuando no se acate la ejecución de una resolución de deportación dictada por el Ministro.

El Yemen es uno de los países que ha sufrido el terrorismo y que ha resultado perjudicado por él, y nunca ha exportado terrorismo; antes bien, ha sido el terrorismo el que ha acudido al Yemen. Su actitud sobre los convenios relativos a este fenómeno es única, sean estos países parte en los convenios o no. Igualmente, la Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo se considera un todo, y no se aborda haciendo distinciones entre árabes y extranjeros.

Párrafo 2 d)**Respuesta**

La Ley 24/1998, relativa a la lucha contra los delitos de secuestro y de asalto incluye numerosas penas, estableciendo la pena de muerte para todo aquel que dirigiese una banda dedicada al secuestro, el asalto y el pillaje de bienes públicos o privados.

La Ley establece penas de 12 a 15 años de cárcel para todo aquel que secuestrase a una persona, doblando la pena hasta 20 años, en los casos en los que la persona secuestrada sea una mujer o un menor.

La Ley establece penas de 10 a 15 años de cárcel para toda aquella persona que atentase contra un Estado extranjero o formase una banda para realizar secuestros, asaltos o pillajes de bienes públicos o privados.

La Ley establece también penas de 10 a 12 años de cárcel para todo aquel que secuestrase un medio de transporte aéreo, terrestre o marítimo, elevando la pena a 15 años en los casos en que el secuestro provocase heridas a personas.

Por lo que hace al caso de retención de una persona como rehén con el fin de presionar a las autoridades públicas u obtener provecho o ventaja, la Ley dispone penas de entre 10 y 12 años de cárcel.

En el caso de agresión a un agente encargado de combatir los delitos de secuestro, asalto o pillaje durante el desempeño de su función, la pena será de 7 a 10 años de cárcel, elevándose a 15 años si la agresión produjese heridas o daños corporales.

En el caso de que se prestase ayuda al secuestrador o de que se escondiese al secuestrado o los bienes secuestrados, la Ley establece penas de 5 a 8 años de cárcel.

Lista de instrumentos bilaterales en materia de seguridad ratificados por la República del Yemen con otros Estados:

1. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre la República del Yemen y la ex Unión Soviética.
2. Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra los estupefacientes entre la República del Yemen y el Reino de la Arabia Saudita.
3. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con la Jamahiriya Árabe Libia.
4. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con el Reino de la Arabia Saudita.
5. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Etiopía.
6. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Jordania.
7. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Egipto.
8. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Djibouti.
9. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Argelia.
10. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Qatar.
11. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Eritrea.

En lo relativo a los instrumentos internacionales, consúltase la respuesta a la pregunta que figura en el inciso 3 d), incluida en el primer informe del Yemen sobre la aplicación del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, presentado al Comité contra el Terrorismo.

Párrafo 2 e)

Respuesta

Atribuciones de los Tribunales del Yemen en lo relativo a su competencia para ver los actos delictivos de los siguientes tipos:

La legislación del Yemen otorga a los tribunales del Yemen competencias para juzgar a quienes cometiesen delitos fuera del territorio del Estado del Yemen, sometiendo estas competencias a tres condiciones:

1. Que el acto juzgado se considere delito en virtud de la legislación del Yemen.
2. Que la persona haya regresado al territorio de la República del Yemen.
3. Que el delito esté penado de conformidad con la legislación del Estado en el que se cometiese.

Este extremo queda aclarado en el artículo 246 del Código Penal (Ley 13 de 1994), que reza así:

“Compete a los Tribunales del Yemen juzgar a todo nacional del Yemen que cometiese fuera del territorio del Estado un acto que se considere delito en virtud de la ley si regresa a la República del Yemen y el delito está penado en virtud de la legislación del Estado en el que se cometiera el delito.”

La legislación del Yemen otorga a los Tribunales del Yemen competencias para juzgar al extranjero que cometiese un delito fuera del territorio del Estado del Yemen en determinados casos:

- Cuando dicha persona cometiera un delito que atentase contra la seguridad del Estado del Yemen.
- Si esa persona cometiese un delito de imitación o falsificación de los sellos oficiales del Estado del Yemen o de alguno de sus organismos públicos;
- Si dicha persona cometiese un delito de falsificación de moneda nacional de curso legal en el Estado del Yemen, o la sacase del territorio del Yemen de forma contraria a la ley o la tuviese para su puesta en circulación o para emplearla de forma ilícita en perjuicio de la economía nacional del Yemen;

Este extremo queda aclarado en el artículo 247 del Código Penal, que establece lo siguiente:

“Compete a los Tribunales del Yemen juzgar a todo el que cometiese fuera del territorio del Yemen un delito que atentase contra la seguridad del Estado, tal como está estipulado en el Capítulo I de la sección 2 del Código Penal, o un delito de imitación o falsificación de los sellos del Estado o de alguno de sus organismos públicos, o falsificase moneda nacional de curso legal, o la extrajese del territorio o estuviese en posesión de ella para su distribución o puesta en circulación.”

Las competencias otorgadas a los Tribunales del Yemen en virtud de este artículo son de carácter general y acarrean potestad para juzgar a “todo aquel que cometiese esos delitos”, independientemente de si es extranjero o nacional del Yemen, o si reside dentro o fuera del territorio de la República del Yemen.

Igualmente, el párrafo 2 del artículo 17 contiene las disposiciones penales siguientes:

“Se aplicarán las leyes penales a los ciudadanos, a los súbditos de Estados extranjeros y a las personas apátridas.”

Este artículo aclara que la legislación del Yemen se aplica a los extranjeros residentes en el Yemen. Asimismo, el artículo precedente reafirma que si una persona extranjera comete fuera del territorio del Estado del Yemen alguno de los delitos mencionados en el artículo 247 del Código Penal y residiese en el Yemen, los tribunales del Yemen tienen potestad para juzgarlo en virtud de las competencias que les han sido otorgadas. Por lo que respecta a la pregunta de qué tribunales tienen competencias para juzgarlos, ello queda aclarado en términos generales a tenor del artículo 236 del Código Penal, que establece lo siguiente:

1) Si el delito se comete en el exterior, es un delito al que se aplican las disposiciones de la legislación yemenita, y quien lo cometiere carece de lugar de residencia conocido en la República, y no se está registrado, se abrirá procedimiento judicial contra él en los tribunales de la capital;

2) Si el delito se cometiere parte fuera de la República y parte en su interior, se verá localmente, siendo competente el tribunal en cuya circunscripción se encuentre el lugar en que se realizaron los actos cometidos dentro del Yemen.

El artículo 234 establece medidas penales, a saber:

1) Corresponde la competencia local al lugar en el que se cometió el delito, al lugar en el que reside el acusado o al lugar en el que fue detenido, y se confirmará la competencia para ver el caso al primer Tribunal que abriese causa judicial contra el acusado;

2) En caso de tentativa, se considerará que el delito se cometió en cualquier lugar en el que se realizara cualquier acto dirigido a su comisión.

Los artículos 234 y 236 establecen de forma detallada cuáles son los tribunales competentes, a los que la legislación del Yemen concede atribuciones para juzgar en los casos en que se cometan delitos fuera del territorio del Estado del Yemen:

- Si una persona no tiene domicilio conocido o no ha sido detenido en el territorio de la República y cometiese un delito en el exterior, serán competentes para juzgarlo los tribunales de la circunscripción de la capital.
- Si la persona que cometiese el delito en el exterior, según lo dispuesto en el artículo 246 en lo que concierne al ciudadano yemenita, y en el artículo 247 en lo relativo al extranjero, y tiene residencia conocida en el Yemen o fuera capturado en cualquier lugar del Yemen, la competencia recaerá en el tribunal en cuya circunscripción se encuentre el acusado, o en el distrito en que hubiese sido detenido, o allí donde se le hubiese abierto causa judicial por primera vez.
- Igualmente, el artículo 234, señalado *supra*, aclara la parte de la respuesta que dice “o residente habitual en el Yemen”, ya que dicho artículo considera que el

tribunal en cuya circunscripción reside el acusado es el competente para juzgarlo si se trata de un extranjero que suele residir en el Yemen.

Párrafo 2 f)

Respuesta

Lista de acuerdos bilaterales y multilaterales de los que el Yemen es parte, relativos al intercambio de ayuda en materia criminal o de extradición de delincuentes

<i>Número</i>	<i>Nombre del acuerdo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Fecha de firma o adhesión</i>
1	Convención árabe unificada de cooperación en materia judicial	Multilateral (árabe)	1984
2	Acuerdo árabe de lucha contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su tráfico ilícito	Multilateral (árabe)	1998
3	Convención árabe sobre la represión del terrorismo	Multilateral (árabe)	1999
4	Acuerdo de cooperación judicial y legal entre el Yemen y Jordania	Bilateral	1998
5	Acuerdo de cooperación en materia judicial y jurídica entre el Yemen y Túnez	Bilateral	2001
6	Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio	Multilateral (internacional)	9 de febrero de 1987
7	Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad	Multilateral (internacional)	9 de febrero de 1987
8	Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	Multilateral (internacional)	5 de noviembre de 1991
9	Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en las fuerzas armadas en campaña	Multilateral (internacional)	16 de julio de 1970
10	Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar	Multilateral (internacional)	16 de julio de 1970
11	Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra	Multilateral (internacional)	16 de julio de 1970
12	Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra	Multilateral (internacional)	16 de julio de 1970
13	Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales	Multilateral (internacional)	17 de abril de 1990
14	Segundo Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional	Multilateral (internacional)	17 de abril de 1990

Existen proyectos de convenios bilaterales e internacionales relativos a esta cuestión que el Yemen pretende firmar a la vez que otros Estados árabes (la Convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional) o con partes internacionales (el Acuerdo internacional de lucha contra el delito organizado transfronterizo y el Convenio internacional contra la corrupción), o bilaterales, con Estados árabes, como Egipto, Argelia, Sudán, Djibouti y Siria, u otros Estados extranjeros, como la República Democrática de Corea y la India.

No existe un calendario legal concreto o específico que deba cumplirse en el caso de que se reciba una petición de ayuda judicial, sino que, nada más recibirse la petición, se adoptan las medidas legales necesarias para ejecutarla, teniendo dichas medidas carácter de urgencia.

Por lo que respecta al período que, como media, exige dar respuesta a esta petición en la práctica en el Yemen, es cuestión que queda sujeta a la magnitud y tipo de ayuda judicial que se solicita. Es un período que normalmente fluctúa entre uno y doce meses, o incluso más.

Párrafo 2 g)

Respuesta

Se ha creado un organismo especializado en la lucha contra los estupefacientes.

Por lo que hace a la coordinación con los organismos especializados, se realiza a través del personal de contacto del Consejo de Ministros Árabes del Interior y de las oficinas nacionales centrales de la Interpol.

Se han intercambiado listas de traficantes de drogas, así como de grupos terroristas, mediante cooperación bilateral, para impedir que puedan gozar de libertad de movimientos.

Los organismos encargados de los asuntos civiles trabajan en un proyecto para emitir un documento personal de identidad electrónico, dotado de alta tecnología, que impida su falsificación. Igualmente, la Dependencia de Emigración y Pasaportes trabaja en la elaboración de un pasaporte dotado de unas medidas de seguridad que impidan su falsificación.

Actualmente, se está creando un sistema de vigilancia de accesos de entrada que utilice las más modernas tecnologías existentes.

La vigilancia del cruce ilícito de fronteras se realiza en cooperación y coordinación con los Estados vecinos con los que el Yemen tiene firmados convenios de cooperación bilateral.

Párrafo 3 d)

Respuesta

El Yemen, desde que firmó en marzo de 1983 el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, ha promulgado sistemáticamente leyes nacionales para acomodar sus textos a los convenios e instrumentos internacionales de los que el Yemen es parte.

Párrafo 3 e)**Respuesta**

Todo convenio internacional al que se adhiere el Yemen o que ratifica se aprueba con una ley de acompañamiento y, por lo tanto, se considera parte de la legislación nacional.

Se han incluido los delitos que figuran en los convenios internacionales en los artículos de los acuerdos bilaterales ratificados por el Yemen con otros Estados.

Párrafo 3 g)**Respuesta**

La base jurídica de la extradición de delincuentes en el Yemen son los acuerdos y convenios internacionales bilaterales y multilaterales de los que el Yemen es parte, ya que, con su mera ratificación, se convierten en parte indivisible de la legislación interna del Yemen y tienen carácter vinculante.

El Yemen hace cuanto está en su mano, a través de sus diferentes instituciones judiciales, políticas, legislativas y policiales, por promulgar leyes y enmendar otras de forma que se adapten a lo dispuesto por estos convenios.

La extradición de delincuentes en el Yemen se condiciona a la existencia de tratados o convenios bilaterales o multilaterales al respecto.

El Yemen, en el marco de los convenios de los que es parte, puede rechazar la extradición de delincuentes por razones políticas, ya que uno de los fundamentos y prioridades básicos en la extradición de delincuentes, sobre los que se apoyan esos convenios, es que los delitos atribuidos al acusado no sean delitos políticos o de naturaleza política.

La práctica del Yemen en lo relativo a su tratamiento de estos asuntos no difiere de la que siguen los Estados partes de la Convención árabe sobre la represión del terrorismo u otros Estados que no son parte de dicha Convención. El principio de la no extradición de personas acusadas de delitos políticos es un principio general, ya que se trata de delitos en los que no procede la extradición.
